
EL PSOE ANTE LA CRISIS DE REPRESENTACION DE LA DERECHA

Enrique Gomáriz



2

Las pasadas elecciones generales del 22 de junio, cuyos resultados no han modificado mucho el cuadro político global, tienen, sin embargo, un valor indicativo fundamental: han mostrado, con mayor claridad que las anteriores, los elementos principales y más profundos de la sociología electoral española y sus consecuencias en la vida política nacional.

En efecto, estas elecciones han señalado la orientación que toma la sedimentación de las actitudes políticas del electorado, en una perspectiva más amplia, al menos hasta que haya un cambio sustancial en la composición generacional de la sociedad española. Dicho en breve, mi hipótesis es que hasta que las generaciones que han

alcanzado la mayoría de edad después de la muerte de Franco no sustituyan a las actuales, que forman la presente clase política (de gestores u opositores del régimen franquista), parece evidente que el comportamiento del electorado español estará marcado por dos elementos fundamentales: la tendencia a *la estabilidad del des-*

arrollo político fuertemente anclado por el centro, y lo que se ha llamado el *tirón del liderazgo*.

De esta forma, la idea que se ha desarrollado durante la transición de que el electorado español, por su impericia, está dispuesto fácilmente a cambiar de voto, cobra así su sentido preciso: cambia prontamente de voto si ello es necesario para garantizar el desarrollo político vigente, es decir, un desarrollo que, en los hechos, tiene todavía como primera prioridad la consolidación de la democracia. Por tanto, un electorado particularmente sensible a los llamamientos de prudencia, pero al mismo tiempo deseoso de alejarse del histórico intervencionismo militar en la vida política. Puede afirmarse que sólo factores socioeconómicos muy graves podrían alterar esa inclinación del voto, o, dicho de otra forma, únicamente una agudización profunda de la crisis económica pondría en cuestión entre sectores amplios del electorado el desarrollo político del actual sistema democrático.

Ciertamente, con esto no quiero decir que la importancia del voto a la estabilidad y del liderazgo vaya a mantenerse constante: lo más probable es que disminuya progresivamente. Lo que se quiere decir es que durará un plazo considerable, a partir de las elecciones de 1986. Porque estas elecciones han consolidado esos dos factores presentes como tendencias en elecciones previas (1979), pero no como simple continuidad de los procesos anteriores a 1982. Para explicar esto, es necesario no olvidar un escenario político crucial: el de mediados de 1981. A pocos meses del intento de golpe se produjo una gran sorpresa en la orientación del voto. Si los cálculos eran que el factor miedo iba a inclinar —con mayor razón que en 1979— el voto hacia una UCD rechazada, sucede que las primeras encuestas que se hacen muestran un brutal voto de castigo hacia esa formación política que favorece claramente al PSOE.

**El electorado español
cambia prontamente de voto
si ello es necesario para
garantizar el desarrollo político
vigente.**

Desde ese momento, hasta las elecciones de 1982, se conforma la nueva preferencia del electorado: por un lado, el PSOE es esa formación política que, con pruden-

cia, va a colocar a los militares en el respetable lugar que les corresponde, pero, por otro lado, parece dispuesto a hacerlo cambiando más cosas: el país y la forma de hacer política (cambio y regeneracionismo).

Por esta razón, la mayoría absoluta obtenida por el PSOE en 1982 no es simplemente una expresión de rechazo a la UCD, sino un auténtico voto entusiasta para romper definitivamente con los fantasmas de la transición, en la perspectiva del cambio social.

La percepción de la gestión socialista durante estos cuatro años ha modificado esa imagen cara a las elecciones de 1986. Es falsa la idea de sectores intelectuales de que la población percibe la gestión socialista como un serio retroceso. Las teorías sobre *el felipismo* como prolongación de un neofranquismo pueden ser preocupantes, pero no son un reflejo de lo que piensa la mayoría de la población adulta (si estamos dispuestos a confiar en alguna medida en los sondeos de opinión). Y digo que pueden ser preocupantes esas teorías en el mismo sentido que lo apunta Ludolfo Paramio en su ensayo sobre la cultura política en la transición (*Leviatán*, n.º 22, Madrid, págs. 95 a 104).

Todos los sondeos realizados sobre la gestión socialista a comienzos de este año (que he comprobado en «El contexto político del debate OTAN», *Tiempo de Paz*, n.º 7, Madrid, págs. 60 a 75), muestran que la mayoría del electorado considera que: 1) la gestión socialista ha avanzado *de forma desigual*, con áreas claras (educación, cultura y política militar), áreas más polémicas (economía, política internacional y de paz), y áreas estancadas (salud y, especialmente, reforma de la Administración); es notable cómo ha descendido

en estos cuatro años el porcentaje de los que opinaban —del 50 al 29— que el PSOE podía combatir la corrupción administrativa, y 2) *la población aprueba la gestión socialista, pero es consciente de que no satisface las expectativas creadas en 1982*. La conclusión que obtenía en mi artículo es que el electorado aprobaba la gestión con un aprobado raso, mientras era casi seguro que, en el actual contexto político, volvería a votar PSOE de forma masiva en las elecciones generales.

En realidad, parece que no sólo la gestión, sino el discurso del gobierno y en especial de su Presidente, han enseñado a la población cómo las expectativas de 1982 se iban perdiendo progresivamente: desde imponderables, como el paro, hasta pérdidas de impulso, como la reforma administrativa, pasando por cuestiones un tanto abstractas (casi morales) para la población, como el referéndum sobre la OTAN. Este último asunto ha sido mencionado

por muchos analistas como el punto cumbre que marcaba el final de la transición. Y puede que, en el plano institucional, eso sea bastante cierto. Pero también es, en el terreno de la opinión pública, el último dato que viene a cambiar el carácter del voto: el sufragio por el cambio será sustituido definitivamente por el voto a la estabilidad.

El propio caso del referéndum ha sido una muestra de ese proceso, más allá del debate sobre paz y seguridad. El hecho es que la población tenía una actitud mayoritariamente contraria a la permanencia en la OTAN, formada fundamentalmente por el PSOE antes de 1982. Años después, Felipe González dejaba explícito que él había cambiado de opinión, pero su discurso en positivo acerca de ese cambio no convencía —según mostraron las encuestas— más que de una forma lenta e insegura. Comenzó la campaña y la pelota continuaba en el tejado (amenazando incluso con caer del lado del NO). Bastó

que, en la última semana, Felipe González relacionara *seriamente* el resultado del referéndum con la estabilidad del desarrollo político (el NO suponía inestabilidad no sólo para la política internacional, sino para el modelo político general) para que se introdujera una brecha de diez puntos a favor de la permanencia. Fue evidente para la mayoría de los analistas que el líder socialista había persuadido a los electores de que no era posible otra política (entre otras razones porque dependía de su voluntad el negarse a gestionar el NO); también ha sido evidente para quienes habían defendido el SI (ver «Alivio y cierta autocrítica», de Ludolfo Paramio, en *El Socialista*, n.º 401, Madrid, pág. 16).

Se había consolidado el voto a la estabilidad, o, al menos, así lo percibía el electorado. Y eso se traduciría en la campaña y en los resultados de las elecciones generales. Naturalmente, cabe preguntarse si era posible otra política durante los cuatro años. Pero incluso en el supuesto de que la respuesta sea no, lo que poca gente duda es que eso queda muy por debajo de las expectativas de cambio de 1982. En todo caso, parece evidente que se ha perdido una ocasión histórica en cuanto al crédito social de una política de cambio y de la coherencia entre esa política y el partido que la representa.

Ciertamente, no puede parecer extraño ese criterio, bastante popular, de que lo que le corresponde al PSOE es una política de cambio, como lo que le correspondía a UCD era una política de estabilidad en el desarrollo democrático institucional. El hecho de que buena parte de los electores hayan votado PSOE en 1986 sabiendo que votaban fundamentalmente estabilidad, nos lleva inevitablemente ante una cuestión complementaria: la crisis de representación de la derecha española.

En realidad, la historia de la transición ha estado marcada por esta crisis de la de-

Los resultados de 1982 son un auténtico voto entusiasta para romper definitivamente con los fantasmas de la transición.

recha, así como su ausencia de solución ha impulsado los intentos involucionistas, o bien, los gobiernos de izquierda. Disyuntiva que resume bastante bien la historia de España en sus últimos dos siglos. Como afirmaban Javier Solana, Joaquín Leguina y Miguel Muñiz a fines de 1978: «La importancia de esta batalla dentro de la representación política de las clases dominantes tiene suficiente importancia como para reflexionar sobre ella» (*Zona Abierta*, n.º 17, Madrid).

Historias teóricas

Puede afirmarse que la consolidación de estos dos elementos, voto a la estabilidad e importancia del liderazgo, han confirmado en las elecciones de 1986 la gravedad de la crisis de representación de la derecha. Una crisis que ha pasado por varias fases.

En el primer período adoptó la forma de una crisis orgánica, o sea, como se conoce en ciencia política, la situación en que la derecha social y los llamados poderes fácticos en que se sustenta no están conformes con los partidos políticos que la representan. Las reflexiones más conocidas en este sentido fueron hechas por Antonio Gramsci respecto al abandono de la derecha social italiana de sus representaciones políticas tradicionales durante la crisis del cambio de década (los veinte a los treinta) para apoyar al partido fascista. A mi juicio, esa idea es útil no sólo para describir el hecho de que los partidos de derecha *ya no* son reconocidos por la derecha social, sino cuando los partidos de derecha constituidos tras un régimen autoritario *no consiguen ser reconocidos* por los grupos sociales de derecha. Y esta es la situación que presentaba la Unión de Centro Democrático ya a mediados de 1978, como describí en mi primer ensayo sobre el tema («El PSOE y la crisis orgánica de la burguesía», en *Zona Abierta*, n.º 16, Ma-

drid). Las razones que estaban en el origen de esa crisis orgánica eran, a mi juicio, de distinto orden: 1) el hecho de que hubiera poco espacio económico, dado que la apertura democrática se hacía tras el inicio de la crisis económica mundial; 2) la existencia de distintas orientaciones políticas y económicas en la derecha social, que dividían incluso las opciones dentro de sus centros de poder más conocidos, por ejemplo, la división dentro de la gran banca, y 3) la excesiva autonomía de UCD por el hecho de haberse construido a partir de la gran autonomía estatal del régimen franquista. No me parecía tan importante, aunque tampoco despreciable, el hecho de que UCD fuera un agregado de familias ideológicas reunidas para el disfrute del gobierno, como se ha dicho tantas veces. Y no me parecía tan importante por dos razones: en general, todas esas familias apostaban por el centro-derecha y no por la derecha conservadora, y porque los partidos de derecha se han constituido más o menos así en toda Europa, después de la segunda guerra mundial, e incluso han seguido reuniéndose sólo para gobernar como en el caso francés.

La cuestión es que sólo dos años después de ponerse en marcha, la UCD era virtualmente zarandeada por la derecha social y sus distintos centros de poder. Y el mundo empresarial no se quedará atrás en esa ofensiva, incluso después de haber conseguido derribar el primer gobierno de UCD, provocando la dimisión del vicepresidente para asuntos económicos, Fuentes Quintana. La CEOE se justificaba así: «Creemos que estamos en nuestro perfecto derecho al exigirle al gobierno una mayor congruencia con lo que representa».

La crisis se hacía tan evidente que pasó a ser para la izquierda un elemento central en la discusión sobre su táctica. Como he citado anteriormente, así lo consideraban Solana, Leguina y Muñiz (*Zona Abierta*, n.º 17), en un trabajo que no por ca-

**La historia de la transición
ha estado marcada
por la crisis de representación
de la derecha
española.**

sualidad se titulaba «La hipótesis del PSOE y los problemas de la izquierda».

En efecto, la crisis de UCD era encarada de forma muy distinta por comunistas y socialistas. Para los primeros era conveniente apoyar a un partido de centro-derecha con problemas, por muchas razones, pero sobre todo porque, desde los Pactos de la Moncloa, el PCE acariciaba la idea de desarrollar una suerte de *compromiso histórico* a la española. Una idea fuertemente impulsada por los comunistas catalanes (accidentalmente, los únicos que habían conseguido unos resultados electorales próximos al socialismo). Pronto esa idea se completó con la de que el PSOE debería acceder al gobierno en coalición con UCD, para salvar esa formación política.

Pero para los socialistas, la crisis de UCD

fortalecía otra cosa: su oferta como alternativa de poder. En realidad, se abría paso en el PSOE la discusión sobre el partido hegemónico, no sólo en la izquierda, sino en el espectro general, como se había dado en el modelo sueco. Pueden describirse dentro del PSOE cuatro posiciones en esos momentos: 1) quienes aceptaban el gobierno de coalición UCD-PSOE, por entender que era la vía más segura de acceder al poder (Boyer, Múgica, apoyados por el diario *El País*); 2) quienes aceptaban la coalición, pero siempre desde la perspectiva de la hegemonía del PSOE en las elecciones (gobierno PSOE-UCD), opción no incompatible con un gobierno únicamente PSOE (preferencia de Felipe González); 3) los que defendían la tesis del partido hegemónico en su sentido puro, es decir, como *realmente* es el modelo sueco, donde el gobierno socialista es sólo la punta de un auténtico iceberg social, claramente comprometido por el cambio (federaciones de Madrid, Andalucía y luego Cataluña), y 4) los que defendían la idea del frente político de izquierdas, en la perspectiva de la Unión Popular fran-

cesa (idea nacida primero en Cataluña y luego adoptada por los «críticos»).

Como es evidente, las posiciones 1 y 4 eran extremas en el PSOE y el verdadero debate se hubiera dado entre las 2 y 3, si no hubiera tenido lugar la crisis del 28 Congreso en los términos que se dio. Pero es importante anotar que ese debate (entre 2 y 3), referido fundamentalmente a las relaciones entre instituciones políticas y sociedad civil, es precisamente el que se ha probado en los pasados años de gestión gubernamental y el que debería renacer cara al inmediato futuro, en la perspectiva que veremos más adelante.

El caso es que, bordeando tramas golpistas (operación Galaxia), el inorgánico Suárez logra refrendar la Constitución y encara las elecciones generales de 1979 buscando una mayor relación con la derecha

**Sólo dos años después
de ponerse en marcha,
la UCD era zarandeada por
la derecha social y sus
centros de poder.**

social. Y mediante la derechización de su programa consigue al menos una tregua que le permite hacer la campaña electoral. Las encuestas muestran su desgaste, pero

hace un llamamiento final al voto del miedo y consigue que el cuadro parlamentario quede prácticamente como estaba.

El hecho de que Suárez pase el listón del electorado crea un cierto espejismo acerca de la resolución de la crisis orgánica. Así, Solana, Leguina y Muñiz, en un análisis de las elecciones inmediatamente posterior, afirman: «Tras las elecciones, UCD se ha convertido en la única representación orgánica de las clases dominantes» (*Zona Abierta*, n.º 19, Madrid). Ludolfo Paramio y Jorge M. Reverte llegan aún más lejos, y en 1980 afirman: «El milagro se ha hecho: Suárez, el oscuro hombre del Movimiento, el funcionario franquista, ha conseguido gobernar con el apoyo de las clases medias y de los sectores del capital más amplios. UCD no sólo es una máquina capaz de ganar elecciones, sino también un instrumento orgánico que garantiza la hegemonía del capital en

el seno del proceso político español» (*Zona Abierta*, n.º 23, Madrid).

El análisis que hacen Paramio y Reverte tiene el interés de que trata de examinar las razones socio-políticas que estaban detrás de la crisis orgánica (que, a su juicio, se resolvía en 1979). De una forma amplia, la pregunta es si la crisis orgánica se produce por razones de crisis interna de la propia derecha social. Y no simplemente por una crisis de orientación política, como yo apuntaba, sino por un choque de grupos sociales dominantes, debido incluso a un cambio profundo en la composición social del país por razones de desarrollo económico.

A mediados de los setenta, esta era la tesis de Nicos Poulantzas en su trabajo *La crisis de las dictaduras: Portugal, Grecia, España* (Siglo XXI, Madrid, 1976). Dicho en breve: los problemas de la derecha española serían producto de una crisis de hegemonía entre dos grupos burgueses: el capital bancario-financiero y el capital industrial. Según la versión *poulantziana*, con el desarrollo económico de los sesenta, el capital industrial de esos países habría puesto en cuestión la hegemonía del capital financiero: lo cual explicaría la tendencia de buena parte de la derecha social por acceder a un régimen democrático, así como la crisis orgánica hasta que no estuviera completamente resuelta la competencia entre esos dos grupos sociales.

Tal análisis socio-político era incorrecto, al menos en España. En primer lugar, porque la industrialización de los sesenta había sido dirigida por el capital financiero, dejando poco espacio al capital industrial no ligado a los grandes bancos. Pero, en segundo lugar, con la crisis industrial de los setenta y el desarrollo del sector servicios, la preeminencia del capital financiero, si varió fue para fortalecerse. Es decir, si había crisis orgánica no

era precisamente porque hubiera un cambio profundo en los grupos más importantes de la derecha socio-económica española.

Paramio y Reverte examinan la crisis orgánica como forma de una crisis de hegemonía, pero no de hegemonía interna (entre grupos sociales de la derecha), sino de hegemonía de la derecha social respecto a toda la sociedad en su conjunto; es decir, la incapacidad para mostrar sus intereses específicos como intereses generales del conjunto. Dicho en sus palabras: «Nuestra hipótesis de partida es que la fracción de la burguesía que podríamos caracterizar como capital financiero establece su hegemonía en España en el período 1959-1969, y que desde 1969 se abre una grave crisis de hegemonía en el bloque dominante que sólo las elecciones de 1979 parecen haber cerrado. Esta crisis de hegemonía puede caracterizarse como una crisis orgánica por el hecho de que el factor dominante en ella es la inexistencia de una representación eficaz en el gobierno del Estado...» (*Zona Abierta*, n.º 23, Madrid, pág. 11).

Esta afirmación parece correcta en su aspecto central: por razones políticas e ideológicas (entre ellas la falta de músculo democrático), a la derecha social y en particular a los grandes bancos les resulta difícil convencer a la sociedad de su modelo de desarrollo social, y tiene que ser una fuerza política inorgánica quien asegure el gobierno a la derecha (cabe preguntarse si algo de esto no está detrás del fracaso claro del Partido Reformista de Garrigues y Roca en las elecciones de 1986, y el relativo éxito del CDS de Adolfo Suárez). Pero la hipótesis de Paramio y Reverte tiene dos aspectos incorrectos. Uno de carácter histórico: el capital financiero

El inorgánico Suárez logró refrendar la Constitución y encarar las elecciones de 1979 buscando una mejor relación con la derecha social.

no impone su hegemonía en la derecha social durante los sesenta, sino —como en otros países europeos— a comienzos de siglo, prácticamente desde el desarrollo

económico que tiene lugar bajo la dictadura de Primo de Rivera (su formación sucede con la constitución de los grandes bancos en el último tercio del siglo pasado). El otro aspecto incorrecto se refiere al supuesto milagro de que el inorgánico Suárez lograra resolver la crisis orgánica: sólo hubo de pasar un año para que los hechos mostraran el equívoco.

Hay que decir que no todos los que sufrieron ese espejismo tardaron mucho en rectificar. A mediados de 1980, Joaquín Leguina escribía: «Cuando el 1 de marzo de 1979 UCD consiguió la minoría más numerosa tanto en votos como en diputados, pareció, visto el hundimiento de la coalición derechista CD (nueve diputados), que la burguesía española había resuelto su crisis de representación política y que UCD se convertía en representante de to-

das las derechas por un largo período. Tan sólo un año después, y tras las elecciones a los parlamentos vasco y catalán, una nueva crisis de representación parece abierta en el seno de la burguesía junto a la misma crisis del Estado» («Crisis de Estado o crisis de representación», en *Zona Abierta*, n.º 25, Madrid).

En este artículo, Leguina apunta al riesgo de ingobernabilidad que puede traer consigo la crisis orgánica y su expresión política, la UCD. Con ello toca un punto particularmente sensible del debate entre comunistas y socialistas en esa etapa: para el PCE, la estrategia del PSOE de hacer oposición a UCD con el fin de ganar las elecciones era peligrosa, no sólo porque fragilizaba una formación política con problemas, sino porque si tenía éxito, un gobierno PSOE exacerbaría las tramas golpistas. La respuesta del PSOE era que la crisis de UCD ya estaba convirtiéndose en una crisis de Estado, y la ingobernabilidad resultante era el mayor peligro para la estabilidad democrática.

Los hechos se encargaron de mostrar,

en 1981, que este peligro era real. Porque sería hacer política-ficción especular con lo que hubiera sucedido si el PSOE hubiera ganado las elecciones de 1979: quizá se hubiera producido una tentativa golpista de mayores consecuencias, aunque la derecha social y sus homólogos exteriores no estaban por un retroceso profundo; pero también es perfectamente posible que las tramas involucionistas hubieran sido neutralizadas antes y no hubiera habido 23-F. En todo caso, lo cierto es que fue el vacío de poder creado por la crisis de UCD, que condujo a la dimisión de Adolfo Suárez, lo que trató de ser ocupado por un nuevo pronunciamiento militar. Como sostuve en la primavera de 1981 («Crisis orgánica, crisis militar», en *Leviatán*, n.º 3, Madrid), el hecho de que la última manifestación de la crisis orgánica de la derecha española y el intento de

Los problemas de la derecha española serían producto de una crisis de hegemonía entre dos grupos burgueses: el capital bancario-financiero y el capital industrial.

golpe de Estado formarían parte de una misma coyuntura política, resulta algo más que una casualidad histórica. Porque al mismo tiempo que, en el plano de los

análisis de coyuntura, no sería exacto afirmar que la entrada, pistola en mano, del teniente coronel Tejero en el Palacio de las Cortes estuvo *directamente* motivada por la dimisión de Suárez (ésta habría jugado más bien el papel de catalizador), sí sería acertado sostener, en el plano de los balances históricos, que la relación entre incapacidad hegemónica y orgánica mostrada por la burguesía española, y la proclividad a la intervención militar en la vida política, es prácticamente un resumen de la historia de este país, desde hace, al menos, siglo y medio.

Frente a la tentativa no hubo una reacción social inmediata, pero se produjo el mencionado cambio en la orientación del voto, con tal profundidad que la imagen de un PSOE regeneracionista barrió literalmente en las elecciones de 1982. La descomposición de UCD dio paso al fortalecimiento de una oferta conservadora, liderada por la Alianza Popular de Ma-

nuel Fraga, mucho mejor recibida por la derecha social. Coalición Popular no pudo frenar la mayoría absoluta del PSOE, pero obtuvo los suficientes diputados (106)

La descomposición de UCD dio paso al fortalecimiento de una oferta conservadora mucho mejor recibida por la derecha social.

ron a las elecciones de 1982. Conforme avanzaba la legislatura, el jefe de la patronal, José María Cuevas, planteó la necesidad de realizar una encuesta monstruo

como para constituirse en una oposición fuerte que pudiera optar a ser alternativa en unas elecciones siguientes. Sin embargo, pronto surgiría en sectores de la derecha social la duda sobre si el resultado de 1982 no sería el techo de la opción conservadora de Fraga, que abriría una nueva etapa de crisis de representación. Las elecciones de 1986 parecen haber confirmado brutalmente ese temor.

La ampliación de la crisis

En efecto, el jefe de la oposición fuerte de 1982 ve cómo en 1986 pierde votos e incluso un diputado. Se ha confirmado así el paso de una crisis orgánica, donde la derecha social no está conforme con una representación política de centro-derecha, a una crisis de representación estrictamente externa, donde la opción de derechas que sí recoge la expresión de la derecha social no consigue el apoyo de los electores para llegar a convertirse en gobierno. En la propia derecha surgen las preguntas ante este paradigma: ¿es que la UCD tenía demasiados problemas para ser un centro-derecha válido? ¿O más bien, dada la importancia del factor liderazgo, hay que sustituir a Fraga al frente de la opción de derechas?

El caso es que sólo un día después de las elecciones, la crisis cobra expresión práctica: la fracción democristiana de Coalición Popular, reunida en el PDP de Oscar Alzaga, inicia el rompimiento de dicha coalición, que será definitivo una semana más tarde. La reacción es tan rápida que apunta a un proceso fraguado mucho antes. De hecho, la idea de que una CD, liderada por Fraga, tiene un techo electoral, ha rodado por las filas de la derecha desde las primeras encuestas que siguie-

ron a las elecciones de 1982. Conforme avanzaba la legislatura, el jefe de la patronal, José María Cuevas, planteó la necesidad de realizar una encuesta monstruo para salir de dudas respecto a CD y su líder. Tal sondeo se realizó efectivamente en enero de 1986, buscando también perfiles alternativos. Los resultados confirmaron los temores de la derecha: Fraga está bien anclado entre la derecha social más conservadora y puede arrastrar entre tres y cuatro millones de votos, pero para el resto del electorado dispuesto eventualmente a no votar izquierda es necesario un líder menos ligado con el pasado, más joven y más dialogante. La derecha socio-económica apuró su búsqueda de una alternativa y fueron estudiando candidatos (Carlos Ferrer Salat, Abel Matutes, José Antonio Segurado, Adrián Piera, etc.), pero ya no había tiempo de reformular la Coalición para sustituir a Fraga, algo a lo que siempre se resistiría la vieja guardia de Alianza Popular.

Así las cosas, la derecha social impulsó dos operaciones paralelas: primero convenció al equipo de CD para que agudizara la imagen de centro-derecha que ya trató de dar Fraga en el 82; pero, al mismo tiempo, apoyó masivamente —especialmente en el terreno financiero— la propuesta alternativa del PRD de Garrigues, con el líder catalán Miguel Roca a la cabeza. Es decir, apoyó la creación de una derecha moderna y dinámica.

Ninguna de las dos actuaciones obtuvo éxito. Es cierto que Fraga se ha quedado ronco de gritar, en una campaña físicamente agotadora, que CD es una oferta moderada y centrista. Incluso él mismo ha hecho esfuerzos titánicos por dar esa imagen. Pero como dijo Juan Ramón Calero, secretario general adjunto de AP, «Alianza Popular es la derecha: nadie se ha creído eso del centro-derecha». Y los otros dos socios de CD, liberales y democristianos, no compensan el peso de Fraga

y su AP. Por otra parte, la alternativa Roca se ha estrellado contra un resultado brutal: ni un solo escaño fuera de Cataluña. Y es cierto —como se ha dicho— que un catalanista no vende bien como líder estatal, pero existen razones más poderosas: en primer lugar, que competía por el espacio centrista con un líder consolidado en el escenario español, Adolfo Suárez; pero también el propio carácter de despacho bancario (incluido ese error publicitario de usar un lenguaje financiero, *operación Roca*) de su oferta ha dejado helado al electorado popular.

Este fracaso del PRD de Garrigues y Roca ha sido tan contundente que tiene consecuencias suplementarias. En primer lugar, la práctica liquidación del PRD como alternativa de futuro, algo grave para la banca. Pero, sobre todo, la disolución de ese proceso acumulativo preparado por los estrategas de la derecha social (muchos de ellos a sueldo de la CEOE):

Se ha confirmado el paso de una crisis orgánica de la derecha a una crisis de representación estrictamente externa.

la suma, a los hipotéticos escaños del PRD, de los que hubieran obtenido liberales y democristianos del PDP, en el contexto de Coalición Popular. Como se dice en estos sectores, «lo que no podíamos imaginar es que la novia se nos iba a morir a la puerta de la iglesia».

En esta perspectiva, la reacción de Oscar Alzaga de separarse de CD es más coherente con la teoría de la operación que la de sus socios liberales. Porque como dice el ex ministro de UCD, Rodolfo Martín Villa: «Desde la derecha no ganaremos nunca». Y si dentro de Coalición Popular no puede compensarse el peso de la imagen de Fraga, es necesario ganar esa imagen fuera. Una operación arriesgada, porque como dicen en AP: «Si el PDP se presenta solo a las elecciones sacará los mismos votos que el PRD», exageración que tiene un punto de verdad. Pero una operación no menos difícil que la que se le pide a Fraga. Como afirma Martín Villa: «A Fraga se le está diciendo

que deje el liderazgo; y a la vez que no deje de presidir AP, porque sin él AP se desguaza en dos horas. Que siga con su partido porque es la fuerza operativa de la coalición, pero que deje a otro partido menos de derecha y menos importante, pero con menos rechazo, como buque insignia. Nadie tiene muy claro cuál debe ser ese partido, ni quién ha de ser el líder. Y pienso que, al final, también se le pide a Fraga que busque a ese líder y le «invista» como sucesor. ¡Ah! ¡Y todo ello, sin hacer inventos de laboratorio de marketing (poco creíbles)! Me parece que le pedimos demasiado» (semanario *Epoca*, 14 al 20 de julio, Madrid).

El problema es que la coherencia de Alzaga le ha llevado a sacar a sus 22 diputados y ocho senadores del grupo parla-

mentario Popular, para llevarlos momentáneamente al grupo mixto, en la esperanza de obtener, mediante una modificación del reglamento de la Cámara, un grupo parlamentario propio. Y eso no ha sido bien visto por algún sector de su grupo, como los vicepresidentes Alvarez, Carriles y Otero Novas, que han dimitido de sus cargos. Como tampoco ha obtenido el aplauso del jefe de la patronal José María Cuevas: «Está claro —dice— que en los partidos de la oposición tiene que haber renovación de estrategias, en los planteamientos, sobre todo para poder transmitir un mensaje de mayor credibilidad para una mayor masa de ciudadanos. Pero yo creo que eso no se logra diciendo: pues si no sé qué, entonces me voy a otro grupo. Creo que eso puede justamente producir el efecto contrario del que se busca». Y Cuevas agrega: «Pienso que sería muy triste en un sistema democrático que un partido que está en el poder se perpetuara, aunque lo hiciera mal, porque no hay nadie capaz de ofrecer una alternativa mejor. Ese sería el camino para el debilitamiento del sistema democrático español» (*Cambio 16*, 28-7-86, Madrid).

La opción de Cuevas y de un sector importante de la propia AP se orienta más bien hacia el recambio de liderazgo. El responsable de estrategia de AP, Alfonso

Las condiciones históricas han marcado bastante la gestión socialista en estos cuatro años.

Osorio, uno de los cerebros de la reforma política, ha presentado un plan a medio plazo: por un lado, olvidarse de la ficción Coalición Popular e ir abiertamente al gran partido conservador, para lo cual hay que pedir a los socios de CD la integración en AP (algo que ha acelerado el paso del PDP al grupo mixto). Con esa operación se lograrían dos cosas: afianzar el voto conservador español y hacer menos traumática, con un plazo más amplio, la sustitución de Fraga al frente de AP. Naturalmente, la idea consiste en afianzar primero la derecha para conquistar luego el centro-derecha. Ello sin perder tiempo en la subordinación de Fraga, para lo cual cuenta con parte de la dirección de AP (Fernando Suárez, Camuñas, Ruiz Soto y el secretario general Jorge Verstryngge).

Ahora bien, en el fondo, la alternativa de Osorio, al poner en primer plano el afianzamiento de la derecha, puede tener un punto de contacto con la teoría de los democristianos rupturistas: la posibilidad de repartirse los espacios centro-derecha y conservador por distintos partidos (naturalmente Osorio busca que AP sea el hegemónico). Pero esto supone romper con la tesis de Fraga, al menos a corto plazo, de la «mayoría natural», es decir, la idea de abarcar todo el voto no socialista con una oferta conservadora. O, dicho en términos comparativos, olvidar el modelo inglés para aproximarse mucho más al francés.

Espacios electorales y cambio social

Ciertamente, lo anterior nos lleva a preguntarnos por la consolidación de los espacios electorales en España. Algo que, desde luego, está resuelto hace tiempo en otros países de mayor rodaje democrático. Y resuelto de múltiples formas.

Descartando para España el modelo de Estados Unidos, caracterizado por la ausencia de un partido de izquierdas o apoyado en el movimiento sindical, quedan en Euro-

pa varios otros. El modelo británico: hasta ahora dominado por dos opciones, la conservadora que abarca también el centro-derecha, y la laborista, que desde el centro-izquierda recogía también la izquierda (una modificación reciente es la tentativa de separar el centro-izquierda neto del resto de la izquierda). La fórmula francesa: donde están bien representadas las cuatro opciones, la derecha, el centro-derecha, el centro-izquierda y la izquierda (aunque desde 1980 el partido socialista parece dispuesto a recoger el centro-izquierda y la izquierda, a partir de la progresiva crisis del comunismo francés). El modelo italiano: el centro-derecha ocupa los espacios conservadores, así como la izquierda es claramente hegemónica frente al centro-izquierda. Y la variante alemana: semejante en la banda derecha al italiano (ambos son partidos democristianos), pero en la banda izquierda más semejante al británico (el centro-izquierda abarca la izquierda, aunque existe la reciente característica alemana de un espacio nuevo para la problemática verde). Otra modificación importante del abanico italiano es la fórmula clara de los *tres tercios* (derecha, centro e izquierda) que se desarrolló en la prolongada vida democrática chilena (por cierto, que nada indica que la apertura chilena se vaya a encontrar con el problema español de la crisis de representación de la derecha, algo especialmente importante en cuanto al espacio del socialismo). Finalmente está el modelo sueco, donde la derecha y el centro-derecha están claramente identificados, pero se enfrentan a un partido socialdemócrata abrumadoramente hegemónico en la sociedad civil que, por consecuencia, ha gobernado ese país la mayor parte de este siglo.

De este análisis comparativo, parece que las actitudes políticas en el electorado

español tenderían a la estructura francesa de los *cuatro cuartos* (como ésta se presentó en los años setenta), si bien con una clara corrección favorable al centro, según se autoidentifican en los sondeos. Es decir, un 30 % se sitúa en el centro-izquierda, otro tanto en el centro-derecha, y un 20 % en la izquierda así como en la derecha).

Ciertamente, estas actitudes en el electorado no siempre pueden expresarse fielmente en la orientación del voto. Y en ello intervienen diversos factores, uno muy importante la organización de las formaciones políticas: puede haber un espacio electoral y no existir de forma presentable el correspondiente partido (PCE), o, por el contrario, carecer de credibilidad (como ha sucedido con Roca).

Otro factor es la estructura social y su desarrollo. En este punto hay en la derecha política un error muy común: considerar que un amplio posicionamiento del electorado en el centro es producto de una

sociedad donde las clases medias forman una desbordante mayoría. Es cierto que entre las clases medias abunda el posicionamiento de centro. Pero no lo es que el centro esté apoyado ni siquiera mayoritariamente sólo por ese sector social. En España tenemos claros ejemplos: en la UCD de Suárez, un apoyo decisivo fue el de los sectores de más baja renta, y en 1982, a pesar de lo que ganó el PSOE de sectores medios, la mayoría de éstos se quedaron con Coalición Popular. Es decir, no hay que confundir sentido del voto con actitud política, pero, sobre todo, ninguna de las dos cosas con situación en la estructura social. Si entre las primeras y la segunda no hubiera toda una serie de mediaciones políticas e ideológicas, sería difícil encontrar peones de derecha o banqueros de izquierda (aunque hay que reconocer que son apreciablemente más fáciles de encontrar los primeros).

Para no perderse en adjudicaciones so-

ciales apresuradas hay que tener una imagen fiel de la estructura social española. Como no es el objeto de este trabajo, sólo haré unas observaciones casi telegráficas al respecto, a partir de una discusión en 1980 con el profesor José Félix Tezanos (*Sistema*, núms. 29, 30 y 34; *Zona Abierta*, núms. 20 y 24). Han transcurrido seis años y ya pueden contrastarse las previsiones con los hechos. Parece evidente que los hechos han dado la razón a Tezanos en su previsión de que la proporción de los ocupados en la industria disminuiría mucho más rápidamente, como en los países punta, en relación con el sector servicios. Mi tesis de que esa velocidad sería en España apreciablemente menor, precisamente por la división internacional del trabajo, no se ha cumplido. La concentración de la crisis industrial en estos años ha espoleado ese cambio. Y argumentar

que la mayoría de los tres millones de parados «son» del sector industrial, o que buena parte del trabajo sumergido se hace en la pequeña y mediana industria, sería

un atenuante poco sólido. Sin embargo, siguen siendo correctas mis apreciaciones sobre este cambio y, sobre todo, la conclusión socio-política. Por un lado, no hay que confundir la extensión del sector servicios con un crecimiento de la misma dimensión de las clases medias. En el sector servicios hay mucha clase media (por renta, status, educación, etc.), pero también hay mucha clase trabajadora (administrativos, secretarías, telefonistas, etc.) y un número nada despreciable —en torno a un tercio— de obreros manuales cualificados y no cualificados (peonaje de manipulación, transporte, etc.).

Es decir, no hay que caer en espejismos si se quiere componer una imagen correcta de la pirámide social española. En 1986 la distribución sigue siendo: una minoría en la cúspide, un 2,5 % (empresarios, gerentes, directores de empresa y altos funcionarios); un bloque de clases intermedias, en torno al 30 %, tanto viejas

**El crecimiento del CDS
ha tenido lugar en los sitios
donde el PSOE
había obtenido más votos
en 1982.**

(pequeño empresario empleador) como nuevas (profesionales y técnicos); y un amplio resto de lo que los sociólogos han denominado como «clases trabajadoras», compuesta por dos sectores, muy entremezclados en sus prácticas sindicales, como son, de un lado, administrativos, dependientes y trabajadores de servicios (en torno a un 30 %) y otro sector compuesto por los obreros manuales del agro, la industria y los servicios (en torno a un 37 %). La tentativa de la derecha de identificar como clase media al bloque de administrativos y dependientes de comercio lleva luego a sorpresas como la de que los bancarios tengan un comportamiento más radical (sindical y políticamente) que los metalúrgicos, por poner un ejemplo.

Cabe preguntarse cuál es la orientación del voto en relación con la posición en esta estructura social. Es un dato que el 35 % superior, de clases intermedias y altas, vota de forma mayoritaria en toda Europa a la derecha y al centro-derecha. Y que los obreros y empleados votan mayoritariamente a la izquierda. Sin embargo, tanto el centro-izquierda e izquierda logran obtener votos de apoyo en las clases intermedias, como la derecha lo hace entre las clases trabajadoras. Pero no hay que confundirse: cuando la derecha gana las elecciones, lo hace partiendo de la gran mayoría de ese 35 % superior, y obteniendo un 20 % más entre las clases trabajadoras (el resto de las clases trabajadoras, un 40 % del total, sigue votando a la izquierda y al centro-izquierda). Pudiendo suceder, como pasó con UCD, que ese sector de clases trabajadoras que vota a la derecha sea el de menos renta «per cápita» del país.

Por eso discutí la conclusión socio-política de Tezanos de que «el PSOE ha tocado techo entre los sectores obreros y tiene ahora que avanzar entre las clases medias» (escuela de verano del PSOE, en 1982). Por el contrario, sostuve que si bien ha-

bía que avanzar entre los sectores intermedios, todavía había mucho que ganar entre las clases trabajadoras. Las elecciones de 1982 mostraron con claridad cómo el grueso de las clases medias se quedaba con CD, a pesar de que el PSOE aumentaba su apoyo también en ese ámbito, y lo que se desplazaba desde UCD era buena parte de su voto trabajador, así como se barría en las bases obreras del PCE y la extrema izquierda. En realidad, los diez millones de votos del PSOE, por los cinco de CD, muestran bastante lo que sería un resultado ideal para la izquierda, en coherencia con la estructura social del país.

Por eso me parece una ocasión histórica perdida que ese bloque social haya votado más a la estabilidad que al cambio en 1986. También por sus consecuencias. En realidad, cuando discutíamos en 1979 sobre el partido hegemónico no veíamos tan claro como ahora el peligro que se apunta: el partido del cambio, ocupado casi exclusivamente en la gestión administrativa, sin haber conseguido la famosa «penetración en el tejido social», pierde progresivamente las expectativas de compromiso por el cambio, y es apoyado por la derecha social para convertirse en una buena opción de centro que busque fundamentalmente la estabilidad. Asistimos así a la creación del *socialismo de centro* que, con su práctica y su discurso, orienta a la población hacia ese voto a la estabilidad.

Para ser justos, hay que decir que las condiciones históricas han marcado bastante la gestión socialista en estos cuatro años. Dicho de otra forma, la crisis orgánica de la derecha ha obligado al PSOE a hacer una política de estabilización. No hay que olvidar el sentido amplio de aquella afirmación de Felipe González tras la

La alternativa Roca se ha estrellado contra un resultado brutal: ni un solo escaño fuera de Cataluña.

tentativa del 23-F: «Estoy dispuesto a sacrificar el partido, si ello es necesario, para consolidar la democracia». No se ha sacrificado el partido, pero su credibilidad

como partido del cambio se ha deteriorado considerablemente.

Así las cosas, puede suceder que el PSOE opte por aceptar esa tendencia y consoli-

darse como socialismo de centro, hasta que los electores encuentren una opción de centro-derecha y lo coloquen en la oposición, donde pueda reconsiderar su papel. Pero también puede suceder que trate de recomponer su credibilidad como partido del cambio, buscando la recomposición del voto en esa dirección, desde el seno de la sociedad civil (es decir, trate de poner en práctica de verdad el modelo sueco).

Naturalmente, esta opción está estrechamente relacionada con la forma de encarar la actual crisis de representación de la derecha. Cuando, al día siguiente de las pasadas elecciones, el PDP de Oscar Alzaga iniciaba su separación de CD, varios líderes socialistas expresaron «su preocupación por el deterioro de la opción conservadora en España». Pero esta preocupación puede referirse a la descomposición general de la derecha política, lo cual sería indudablemente peligroso, o más bien al hecho de que caiga la derecha conservadora —con la cual siempre se ganarían las elecciones— y sea sustituida por un centro-derecha más competitivo. Porque es indudable que eso tendría más peligros para la mayoría socialista, pero cabe preguntarse si no sería mucho mejor para el país. En realidad, se daría una competencia política en términos más progresistas, y el PSOE se vería obligado a recuperar su papel de partido del cam-

Parece que las actitudes políticas del electorado español tenderían a una estructura similar a la francesa.

bio. No parece que haya mucho de malo en ello.

En todo caso, no es fácil que la derecha resuelva así su crisis de representación:

mediante la reformulación rápida de un centro-derecha hegemónico en la derecha. Las ofertas que hay para ello en el Parlamento no tienen precisamente un futuro de éxito garantizado. La suerte de los democristianos del PDP ante unas elecciones se parece a la de los primeros galeones que trataban de cruzar el Atlántico. Pero tampoco el CDS de Adolfo Suárez tiene un futuro fácil. A pesar de que ha conseguido un grupo parlamentario propio y ha reforzado su principal capital: el liderazgo de Suárez, sigue teniendo el rechazo de buena parte de la derecha política y social, lo que le supondrá un avance difícil entre los votos actuales de CD; es decir, obtendrá el apoyo de una franja del centro (la que ha ganado en 1986) y la que está todavía en el cauce del PSOE. De hecho, el crecimiento del CDS en las pasadas elecciones ha tenido lugar en los sitios donde el PSOE había obtenido más votos en 1982. En resumen, todo indica que la fórmula francesa es el horizonte más probable: derecha hegemónica con centro-derecha independiente. Incluso para semejarse más, Alianza Popular trata de hacer lo que llama la «operación Chirac», es decir, recomponer su fuerza ganando en las próximas elecciones municipales la alcaldía de la capital. Pero es difícil imaginar aún si se consolidará ese modelo francés y, de forma más general, si la derecha llegará a resolver, en la legislatura que comienza, su profunda crisis de representación política.